

EL INELUDIBLE ENTRAMADO DE LAS REFORMAS

David Ibarra
23 de febrero de 2010
El Universal

Las crisis multifacéticas, social, económica, fiscal, financiera que campean hace años en el país, nacen del defectuoso reformismo jurídico, institucional y político implantado para incorporar el país tanto al orden económico de la globalización como perseguir el afán legítimo de democratizar la vida nacional.

En materia económica, se incorporó México a los mercados globales y liberó de trabas al hombre económico –nacional o extranjero- con la desregulación, las privatizaciones y el fortalecimiento de los derechos de propiedad. En contrapartida, se acotó la soberanía de las políticas públicas, en favor de los mercados internos y sobre todo de los externos y se aceptaron graves polarizaciones distributivas.

En el campo democrático, se ha ganado transparencia en los comicios y fortalecido los partidos políticos. En contrapartida, se perdió la capacidad unificadora –por autoritaria que fuese- del poder ejecutivo y, en consecuencia, la capacidad de unir a la población en torno a programas y fines comunes, cuando se subordina la política o los dictados inapelables del mercado.

El desarreglo institucional refleja, desde otro ángulo, el déficit democrático y la ineptitud de imprimir vigor al proceso nacional de desarrollo. De ahí el resquebrajamiento del pacto social, manifiesto en el ascenso de la pobreza y la informalidad en el trabajo que quitan la voz y lastiman al 40%-50% de las familias mexicanas. O visto desde otro ángulo, el rezago persistente de México

frente al de los estados latinoamericanos, sea en el combate de los efectos de la crisis financiera mundial o en procurar bienestar a su población.

Más aún, la agobiante hondura de la depresión económica y el desorden político, alimenta la proliferación de propuestas de cambio que inician o aplazan los partidos sin mayor orden de prelación. Para unos, la solución a las penurias de las finanzas públicas reside en comprimir impuestos, gastos públicos y burocratismo. Otros, preferirían abrir todavía más la economía y la política a la disciplina del mercado. Unos terceros quisieran que las políticas públicas se orientaran al crecimiento. También hay quienes persisten en sostener que la inflación es el peor de los males a combatir, frente al cual las aspiraciones al bienestar de la población deben ceder el paso.

En la práctica, son numerosas, angostas, frecuentemente fallidas las reformas emprendidas aisladamente, al margen de un contexto integrador. La reforma petrolera, no ha hecho resurgir a PEMEX, no moderniza la política energética al no combinarse con una verdadera reforma tributaria; la reforma de pensiones simplemente ha trasladado las cargas financieras del Estado a las familias, con mengua de los ingresos y consumos futuros de los beneficiarios; las reformas fiscales, de alcances cortos y sin respaldo ciudadano, han quedado reducidas a simples misceláneas que complican la administración tributaria, sin alivio de las finanzas públicas. La reforma laboral no se ha lanzado al debate público, pero ya enfrenta oposición de los trabajadores, sobre todo frente a los embates al sindicalismo de mineros y electricistas que ponen en tela de juicio tanto la estabilidad de todos los líderes obreros, como la insuficiencia de las políticas sociales. Con un mercado de trabajo en ruinas, con desempleo masivo, poco se progresa en garantizar la seguridad ciudadana y erradicar al crimen organizado, como lo atestigua dolorosamente Ciudad Juárez. Ahora, en plena

crisis se lanza inopinadamente una compleja iniciativa de reforma política con innegables ingredientes de ingeniería parlamentaria que llevarían a formar mayorías legislativas que disolviesen acaso artificiosamente la falta de unidad entre los poderes ejecutivo y legislativo. Se quiere fortalecer al poder ejecutivo, quizás ganar terreno electoral o eventualmente vigorizar la participación ciudadana en decisiones de gobierno. Ya tiene defensores con el argumento del cambio por el cambio como remedio a la parálisis política, sin que haya terminado el debate sobre sus contenidos, oportunidad e interrelaciones con otras exigencias transformadoras tanto o más apremiantes.

Sanear las distintas expresiones de la crisis, debiera comenzar por reconocer sus interrelaciones, su entramado, y de ahí hacer selección decantada de las prelações nacionales, sin olvidar la necesidad de avanzar gradual pero simultáneamente en la solución de varios dilemas, ante el riesgo de volver a malograr reformas emprendidas de manera aislada. Quiérase o no, el largo aplazamiento de políticas públicas que concilien el interés nacional con los de la globalización, han enredado y multiplicado los problemas del país.

Insistimos en señalar reformas defectuosas que no tuvieron en cuenta sus nexos con otros fenómenos y políticas. El impulso al desarrollo hacia fuera, requirió ciertamente de reformas que abriesen las fronteras al comercio exterior, pero su éxito también dependía de acciones ausentes: políticas industriales de fomento al comercio exterior, políticas cambiarias y financieras que combinadas llevasen a crear un sector exportador verdaderamente pujante. De la misma manera, la viabilidad, la eficacia, de las reformas fiscal, laboral o política están inextricablemente ligadas entre sí y sobre todo con las políticas sociales y de crecimiento. Sin una estrategia decidida de empleo, de avance acelerado de servicios universales de salud, entre otros objetivos, la generalización de los

impuestos al consumo o la flexibilización laboral, resultarían impracticables o reconocerían costos enormes de legitimidad a gobierno y partidos políticos. Algo similar puede decirse en torno a la propuesta de reforma política que podría quedar en simple superestructura institucional, difícilmente traducible en solución pronta a las carencias impostergables de la pobreza, la exclusión social y la inseguridad.

Seguimos inmersos en una crisis paralizante: el mercado sin Estado orientador, regulador y mediador poco o nada resuelve de la debacle económica y política; el Estado sin sociedad, da tumbos, incapaz de aglutinar constructivamente a las fuerzas colectivas. Por eso, habría que invertir las relaciones políticas: la democracia sustantiva debe prevalecer sobre el autoritarismo economicista; la búsqueda del empleo y de la equidad social debe primar sobre cualquier otra meta y formar el esqueleto vertebrador de las reformas a emprender. El sistemático desmantelamiento anterior de los instrumentos de acción del Estado y el lento avance de la democracia no electoral, debieran enmendarse con reformas modernizadoras entrelazadas que permitan reconocer y luego dar satisfacción a las demandas ciudadanas.